

## CRISIS REGIONAL EN LA CORDILLERA ANDINA

*Aurelio Cebrián Abellán\**

Universidad de Murcia

### RESUMEN

La nueva realidad macroeconómica es más favorable pero la política es inoperante, y las ventajas recientes se contrarrestan con la pervivencia de cargas: homogeneización hacia el subempleo y pobreza, eclosión de la economía de los **enervantes**, rigurosos desajustes urbanos, aislamientos intersectoriales, ausencias de políticas industriales, centralización, escasa operatividad macroinstitucional, etc. Frente a esta situación se requieren urgentes reformas que ofrezcan el marco conveniente para la correcta inserción en la moderna realidad mundial. El objetivo es analizar los factores de la crisis a escala subregional y nacional, partiendo de los hitos que expliquen la situación reciente de crisis regional.

Palabras clave: inflación, deuda, evasión de capitales, política fiscal, políticas de ajuste, subempleo, pobreza, salarización, balanza de pagos.

Regional crisis in **the** Andes

### SUMMARY

The new macroeconomic reality is more auspicious; however, the policy is inoperative and the recent advantages counteract with the **permanence** of loads: equalization towards underemployment and poverty, important urban disorders, the bloom of the economy of enervating products, inter-regional isolation, lack of industrial policies, centralization, scarce macroinstitutional effectiveness, etc. Facing this situation, urgent reforms are required, reforms which offer the suitable framework for the correct insertation in the modern world-wide reality. The objective is to **analyze** the factors of the crisis to under-regional and nation-wide scale, starting from the landmarks that could explain the recent regional crisis.

**Key words:** inflation, debt, flight of capital, fiscal policy, settlement policies, underemployment, poverty, wages, balance of payments.

Esta región ha cambiado sus estrategias de desarrollo cuando va llegando a su fin el ajuste económico (basado en la reducción de gastos sociales), aunque unido a estanca-

---

Fecha de Recepción: 15 de abril de 1996.

\* Dpto. de Geografía Física. Humana y Análisis Geográfico Regional. Facultad de Letras. Universidad de Murcia. Apdo. 4021 - 30080 Murcia (España).

miento. La deuda está más controlada y se importa capital; pero el crecimiento no llega (Venezuela, Bolivia,...) o lo hace con desigualdad (Argentina, Colombia, Chile,...). Por ello se acentúan las disparidades sociales y la desindustrialización y el ahorro no cuajan; así la pobreza se irradia. Por ello, la realidad macroeconómica es relativamente positiva, la política produce asimetrías, y perviven cargas como inoperancia del aparato productivo, corrupción, y crisis de los partidos políticos (CASANUEVA, H., 1994). La salida está en aprovechar la capacidad de desarrollo intrínseco, abandonar posturas endogámicas, e involucrarse en las nuevas perspectivas de la mundialización. Una opción difícil porque se arrastran convulsiones. Las demográficas derivan de una estructura agraria anquilosada y sensible a estímulos **externos**, con la resultante del aumento de agricultores residentes en ciudades (SANTOS, M, 1992; 139), porque los minifundistas quedan al margen modernizador y las Nuevas Formas de Inversión les trasladan los riesgos (OMAN, Ch.P., 1988; 25). El proceso acaba en urbanización compulsiva (Venezuela) (JAIMES, E. et al, 1988), e involución metropolitana. Los planes de ajuste han incrementado el empleo clandestino y consolidado el efecto trabajador desalentado (BECCARIA, L. y ORSATTI, A., 1985; 72); han subido los precios y descendido la capacidad de consumo. La caída de los salarios explicará la magnitud de la pobreza (puede ir asociada al crecimiento económico o violencia) (UPRIMY, R., 1992; 121).

Una respuesta a la situación creada ha sido la eclosión de la economía de los **enervantes**, básica en algunos países (Colombia, Bolivia,...), y consecuencia del agravamiento de la condición de subdesarrollo. Ello explica el incremento productivo y su papel en los funcionamientos estatales (al margen de economía paralela). En Perú y Bolivia es el primer producto de exportación (da empleo a la cuarta parte de los bolivianos) y el segundo en Colombia (asegura el pago de la deuda). Pero también deriva en inestabilidad interna, violencia y corrupción política (en Bolivia los beneficios son acaparados por las clases pudientes; en Perú alimenta guerrillas; y en Colombia el control mafioso contamina al Estado) (CEBRIÁN, A., 1995). Colombia y Bolivia se han convertido en especializados; crisis, desocupación, hundimiento del precio de productos tradicionales, inflación, incidencia en las masas campesinas de las políticas de ajuste, etc, han convertido a los nuevos productos en patrones productivos (DAVILA, A., 1989. Véase también CEBRIÁN, A., 1995).

En suma, perviven cargas graves: la corriente migratoria consolida la dialéctica riqueza-pobreza, el crecimiento del sector informal, y la homogeneización de la pobreza (la deuda social). En Chile es alto el porcentaje de necesitados, aunque ha sido combatida la extrema pobreza (en Santiago proliferan las agrupaciones de subsistencia) (CEBRIÁN, A., 1992; 27); en Colombia las viviendas compartidas (en Bogotá el crecimiento **recae** en sus tres cuartas partes en la inmigración); etc.

Tampoco la producción del campo acompasa a las necesidades y surgen nuevas relaciones entre población dependiente y activa (GARCÍA, R., CORDERO, F. e IZQUIERDO, A., 1987; 50). Asimismo, entre campo y ciudad y dentro de la propia ciudad, con invasiones organizadas de inmigrantes (en Bogotá el surgimiento de las **ciudades-hongo**), que generan catastróficos procesos tanto sociales como naturales (VIOLA, E.J., 1989; 175). Así, aparece una clara disfuncionalidad: brote urbano riguroso con la consolidación del **voluntarismo**, conjuntado con carencia de inversiones públicas, un rasgo extrapolable porque la población marginal urbana desarrolla la estrategia de lo posible. La

respuesta está en invertir en el punto de salida, algo que los gobiernos no pueden permitirse por el ahogo de la deuda, y que acaba en hipertrofia urbana, con un proceso equivocado de modernización, dirigido por oportunismos políticos e ideológicos. Los desajustes urbanos reflejan los regionales y nacionales; antes las ciudades dependían del campo y la capital de las regiones cuando hoy es a la inversa, con la consolidación del centralismo.

Como derivación, el subempleo es otra lacra. En los ochenta afectaba a la tercera parte de la población urbana venezolana con injusticias laborales por el control económico externo (SOTO MORA, C., 1990; 64). Tanto los trastornos económicos como los programas de ajuste han agravado desequilibrios y desigualdades en la distribución del ingreso (BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 1990; 25), y una precariedad laboral cada vez más consistente, con remuneración a la baja por exceso de oferta laboral. Es la victoria de los precios frente a los salarios. En el Perú de la segunda parte de los ochenta el salario real experimentó fluctuaciones exorbitadas, mientras el Estado los ofrecía muy deprimidos (ALARCO, G. y DEL HIERRO, P., 1989; 164). Por esas fechas en Venezuela las devaluaciones del bolívar y subida de precios afectaron a la capacidad adquisitiva. En Chile el régimen neoliberal autoritario trajo desempleo, reducción de los niveles de ingreso y exclusión social; los ajustes posteriores complicaron más el panorama social (POLLACK, M. y UTHOFF, A., 1989; 130).

Ejemplos y culpables no faltan cuando la cuestión reside en la forma de crecer, en evitar la obsesión por el crecimiento económico sin medir las consecuencias (un buen ejemplo se encuentra en Bolivia, donde se frenó la inflación a costa del desabastecimiento y especulación con los productos básicos). Se debe recurrir a desmonopolizaciones, con el establecimiento de una política social asociada a otras de empleo y haciendo intervenir en interacción a todos los sectores, incluido el informal, integrando y localizando las acciones públicas en cooperación con los afectados. Pero surgen o mantienen inconvenientes; en Argentina es fuerte la concentración espacial del poder en detrimento de las potencialidades regionales; en Venezuela la deuda agota las posibilidades distributivas de la riqueza; en Chile el papel del Estado ha pasado a subsidiario (involucrado en una crisis de definición); etc.

Además, toda estrategia industrial puesta en vigor es sensible a las transformaciones del capital internacional. Y el aislamiento intersectorial propicia que las industrias no participen como debieran en las economías: proteccionismo y monopolización se convierten en elementos explicativos de la crisis (VUSKOVIC, P., 1984; 20-21), junto a la ausencia de una verdadera política industrial (OMINAMI, C., 1988; 849), con un crecimiento ligado al consumo de grupos sociales y auspiciado por instituciones incapaces (LAMBERT, D.C. y MARTIN, J.M., 1976; 391-392). En este aspecto queda todo por hacer.

En otros casos se continúa delegando la responsabilidad organizativa al Estado, con la centralización como parte y requisito de la configuración del Estado-nación (BOISIER, S., 1992; 39). El Estado atraviesa una metamorfosis, cuando urge un cambio en sus relaciones con los agentes sociales (LEDERMAN, E., 1989; 325). En este sentido gana terreno el discurso centralista: Chile, Venezuela, ... Sirvan algunos ejemplos. Frente al centralismo boliviano las expresiones de regionalismo fanático existentes entre La Paz y Santa Cruz son reflejo de intereses contrarios entre facciones de la burguesía; Oriente será el espacio a fomentar mientras el Altiplano es reflejo de los modos de vida de producción capitalista; se hizo una regionalización sectorial (VAN LINDERT, P., 1991; 124-125), con la sobreimposición del centralismo sobre tendencias descentralizadoras. Más avanzado fue el

modelo peruano, con reconocimiento del regionalismo y descentralización; es el país donde el cambio de la estructura territorial ha llegado más lejos, con unidades geoeconómicas dotadas de autonomía económica y administrativa (MARCHENA GÓMEZ, M., 1992-93; 263-264); pero en 1992 el Gobierno impondría modificaciones: las autoridades regionales fueron sustituidas por gubernamentales. En el Cono Sur la situación ha sido diferente; el nacionalismo no produjo sentimientos de solidaridad, mientras el regionalismo encuentra espacios identificables con culturas que superan fronteras y con otros económicos homogéneos; existe una mayor conciencia para fortalecer sectores periféricos, hasta el extremo que la cuestión regional se convierte en la de conciencia regional en la periferia (BORDORF, A., 1991; 75). En Chile durante los setenta la regionalización fue ideológica, centralizadora; en lo económico muchas han quedado abandonadas y desfasadas con respecto al Gran Santiago (GRENIER, Ph., 1992; 199); la impronta política ha primado sobre la trayectoria histórica. No es muy diferente la situación argentina donde las entidades territoriales sufren deterioro, con un escalón de las regiones muy incierto; los conjuntos regionales carecen de consolidación, con fuerte dependencia del centro, mientras los espacios organizados sólo abarcan la tercera parte del país. La oposición entre regiones tradicionales y nuevas es artificial: el planteamiento es unir provincias del noroeste como contrapeso a otras comentes regionalistas (CHECA SÁNCHEZ, A., 1993; 125).

Por tanto, la cordillera requiere cooperación externa, perseverancia y tiempo (FERRER, A., 1989; 227); pero es preciso voluntad política y consensos sociales. También, reformas (políticas y estructurales), exportaciones y otra orientación norteamericana frente a la deuda, así como un sector comercial que lime sus efectos (EE.UU carece de estrategia de acercamiento, con actuaciones episódicas). Con respecto a la cooperación interna el Pacto Andino ha sido dubitativo por razones ideológicas y rasgos puntuales, como la salida de Chile, país inspirador del proyecto (ALEGRETTI, S., 1990; 300); luego, la reacción del Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena (1987) ha permitido salvar la consolidación institucional con la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Andino de Reservas; pero permanece aislado de otras asociaciones y carece de velocidad de desarrollo. Por ello Bolivia optó por URUPABOL.

En cuanto al exterior cabe hablar más de influjo que de relación. La región se convierte en los ochenta en exportadora de capitales, situación complicada con la paralización de las integraciones regionales, con una autonomía ficticia en términos objetivos. Junto a la crisis petrolera inciden los errores en política social y económica internas, y el rescate del neoliberalismo; han deteriorado el sector externo, incrementado la deuda y ocasionado vaciamiento financiero. La excesiva presencia estatal ha sido negativa (DUBRESSON, A. y VANNEPH, A., 1991; 183).

En adelante el objetivo es analizar algunos de estos aspectos en cada uno de los sectores que integran la Cordillera.

## 1. REGIÓN SEPTENTRIONAL

### 1.1. La difícil situación de Venezuela

Dispone de un amplio abanico de recursos naturales (más del 90% del comercio exterior está representado por envíos de minerales y petróleo), con producción muy

elevada, aunque el país sólo es capaz de consumir el 5%, con lo cual la disponibilidad exportadora es total, si bien el control del refino se encuentra en manos foráneas. El hierro dispone de reservas muy abundantes (estimadas en 2.000 millones de toneladas), explotadas en buena medida a cielo abierto, lo que completa el panorama favorable ofrecido por los recursos energéticos, si bien con el factor negativo de la dependencia extrema del exterior, tanto en ventas como alteraciones de precios. El petróleo provee la mayor parte de los ingresos, pero provoca una fuerte debilidad: las inversiones se han verificado en períodos de abundancia, lo que ha provocado fuertes efectos sobre el devenir económico (RODRÍGUEZ, M.A., 1986; 93); además la mala gestión se tradujo en fuga de capitales y en no haber aportado una política industrial coherente de diversificación de actividades. Desde el punto de vista infraestructural el coste social de la industria automotriz en Venezuela se detecta en elevados precios de transporte por unidad de peso transportada, con un exorbitante despilfarro energético (JAIMES, J., VIRLA, E. y GONZÁLEZ, P., 1988; 122). El potencial es muy amplio pero no se exprime por deficiencias infraestructurales, con su efecto arrastre sobre los intercambios y el consiguiente estrangulamiento interno. Además, desde mediados de los ochenta el sector externo no contribuye al desarrollo económico, con unas importaciones que crecen a un ritmo superior a las ventas. Con todo, se ha producido una diversificación, pero el intervencionismo exterior se plasma en el alto grado de dependencia industrial a injerencias foráneas.

La crisis petrolera de 1974 se tradujo en un fuerte ritmo del gasto público e importaciones. Hacia finales de la década el crecimiento quedaba muy limitado, tanto por afectación de la crisis precedente como por otros cuellos de botella que impidieron mantener ritmos alcistas. La caída de la renta petrolera condicionó el gasto público e hizo aparecer un fuerte déficit fiscal. Junto a ello la inversión privada se tradujo en déficit en la balanza de pagos. Todo conjuntado obligó al gobierno a imponer medidas drásticas: austeridad fiscal y liberalización económica (HAUSMANN, R. y MÁRQUEZ, G., 1985; 148). Pero la profundidad de la crisis se evidenció cuando, pese al incremento de los precios de los crudos a principios de los ochenta, la economía no logró alcanzar su crecimiento anterior. La crisis económica nacional se desencadena simultáneamente con el alza de dichos precios, que llegó a generar un aumento de los ingresos reales de casi la cuarta parte en estas fechas. Luego, la posterior caída redujo la capacidad del gasto fiscal. Se puso en práctica un Plan de Ajuste (1984) que consiguió equilibrar la fiscalidad, estabilizar la moneda y recuperar parte del sector externo (aunque la devaluación empobreció las importaciones y favoreció las ventas); las ventas se verificaban por empresas públicas, lo que permitió la recuperación nacional.

Con todo, los efectos de la crisis fiscal sobre la economía son la expresión más clara de los desajustes nacionales tras la primera gran crisis petrolera. Las políticas contractivas desde 1979 han destruido la economía (el PIB de 1985 era inferior al de 1977, y el paro alcanzaba las más altas cotas conocidas). Desde 1984 la situación es calificada de pésima, como derivación de los cinco años de políticas de ajuste (RODRÍGUEZ, M.A., 1986; 93). Medidas para frenar la crisis de 1983 fueron: un sistema de tasas de cambios múltiples que originó un libre mercado de divisas, restricción a las importaciones, controles de precios y contracción del gasto público. Pero el gobierno Herrera Campins efectuó un desajuste al corregir muy poco el atraso cambiario, con unas inmediatas consecuencias: contracción del PIB, y generación de un exceso comercial (RODRÍGUEZ, M.A., 1986; 111). Hace

una década se mantenían: sistema de cambios múltiples, contracción del gasto público, y reducción del consumo privado. Y sus consecuencias: incremento del paro, ahorro financiado desde el sector público, y un sector privado acreedor.

Al margen de acontecimientos puntuales, se requería la transformación de una economía petrolera en otra moderna capaz de impulsar el desarrollo nacional. Se necesitaban cambios estructurales, una reorientación de las inversiones, y la superación de la dependencia de agentes externos. Pero no se ha diversificado la **economía** ni se han incorporado todas las regiones al desarrollo; los fondos petroleros han ido a la costa, a las urbes, y muy difícilmente a prioridades o lugares afectados negativamente por el proceso económico. Las ciudades han crecido al amparo del sector extractivo y áreas circundantes a las explotaciones han quedado al margen del desarrollo; mientras, sectores necesitados de inversiones han visto como sus demandas dejaban de ser contempladas en las deficientes reformas estructurales emprendidas. La fuerte participación del capital extranjero condiciona el despegue, tanto por la orientación de la economía hacia sectores interesantes para el exterior como por la misma salida de capital, y porque deja poco margen a la iniciativa nacional (el Tratado de Reciprocidad Comercial con EE.UU. ha obstaculizado la expansión hacia áreas que la requerían).

Como conclusión: enorme deuda externa, estancamiento desde 1979, y contracción del ajuste desde mediados de los ochenta, son los despropósitos de los últimos gobiernos. La solución a la crisis radica en poner la política macroeconómica al servicio de la reactivación del aparato productivo y lucha contra el paro, porque las características de la economía son prometedoras para un crecimiento a medio y largo plazo (hay abundancia de recursos, equipamiento moderno, y un cada vez más importante desarrollo de industrias básicas). Hacen falta políticas adecuadas; la mala gestión es causa de los males; se eligió la vía del endeudamiento en la etapa floreciente sin reparar en las consecuencias.

## 1.2. El caos de Colombia

La anarquía imperante encuentra explicaciones múltiples. La situación de la deuda fue especialmente grave; mientras en buena parte del subcontinente era de carácter privado aquí procedía del sector público, con fundamento en los débitos al exterior del sector eléctrico unido a la caída del peso. Su incremento se palió con la desmesurada subida de tasas a los consumidores, y las consiguientes y protestas sociales. Sin embargo, aquí una explicación resalta: las implicaciones de la cocaína, el negocio nacional. La eclosión se producirá a partir de 1975, cuando se iniciaron las masivas exportaciones al mercado norteamericano (la situación no es privativa de Colombia pues también en Bolivia se ha convertido en motor de la economía) (BONNET, N., 1987; 18). El éxito de su consumo fuera de las fronteras ha servido a EE.UU. de pretexto para desencadenar actuaciones en áreas geoestratégicas. Pero el problema de envergadura es interno, aunque la inducción parte de las mafias norteamericanas; pero son los comerciantes de Medellín los primeros en especializarse en este comercio, para luego transformarse en fuerza delictiva pasando al sector informal o ilegal. La explicación del auge en un primer momento es doble; de un lado, la existencia de un mercado pagador, y sobre todo los altos beneficios a corto plazo; y junto a ello el carácter internacional y de liquidez del citado mercado.

Tampoco conviene olvidar que son productores Bolivia y Perú, pero que la transformación y distribución se efectúa desde territorio colombiano. Por ello las acciones gubernamentales han sido nulas (el convenio de 1961 establecía que en un período de veinticinco años los países productores debían prohibir el cultivo de coca, con el resultado conocido). Aún más: se tolera el mantenimiento de las rutas tradicionales a través del Caribe. Por estos motivos la colombiana es la economía de la droga (UPRIMY, R., 1992; 130), un capitalismo mafioso que define la misma inestabilidad del Estado. Pero es muy dinámica por la fuerte circulación dineraria que posibilita, si bien con el contrapeso de ilicitud y violencia como moneda de cambio, y con independencia de la fuerte crisis moral y hundimiento de los mecanismos de regulación social. El crecimiento se consigue gracias a la violencia y no a pesar de ella, que llega a ser incompatible con el proceso productivo nacional reglado y que impone uno propio no sujeto a directrices.

El Estado, con ayuda y bajo la presión internacional (especialmente norteamericana), ha emprendido algunos proyectos de sustitución. Así, en la región de Yungas se instala el proyecto Agroyungas, que busca diversificación agrícola, instalación de agroindustrias y establecimiento de redes de comercialización. Pero la eliminación del cultivo de coca no puede hacerse rápidamente; es preciso mutar las estructuras sociales acomodadas a este sistema. A la región de Chapare (Cochabamba) no han llegado con fuerza estos proyectos, razón por la cual continúa siendo una de las principales suministradoras al narcotráfico. Sin embargo, dos frentes de actuación se mantienen: la subvención de 2.000 \$ por hectárea sustituida de coca, y el establecimiento de granjas experimentales para introducir cacao y café. Pero fallan en lo esencial: faltan las infraestructuras para irradiar el sistema y hacerlo ágil; y los créditos de plantación de cultivos sustitutivos son altos. La ONU participa con proyectos que no han alumbrado resultados (se ha convertido Colombia en procesadora de pasta base de Bolivia y Perú). Campesinos acomodados a altos ingresos y facilidad de venta del producto, instituciones manchadas en el reparto de beneficios, falta de alternativas, presión internacional mal concebida, ayudas exteriores poco aptas en el contexto del atraso, etc., componen elementos capaces de explicar el caos imperante. El resultado es que se pone contra las cuerdas al Estado, exponente de un sistema que ha conducido al colapso.

## 2. CORDILLERA CENTRAL

### 2.1. La ficción de Ecuador

Es el país de las rupturas espaciales. En Guayaquil se asentó la oligarquía, mientras en el resto de áreas y ciudades la dinámica económica ha sido muy lenta; después de los setenta todo se volcó en dirección al mercado internacional, y con el petróleo la modernización se cuela selectivamente (FARREL, G., 1989; 15). El Estado comienza a multiplicar sus ingresos y el consumo se generaliza, pero el agro pierde importancia. Y comienzan los problemas: la emigración se agudiza, se subsidia el capital hasta crear desequilibrios en los recursos productivos, y el endeudamiento a partir de 1977 suspende las ayudas financieras y obliga a incorporar medidas de ajuste.

Hoy las importaciones de productos suntuarios aumentan un 67% anual. Se vive en la ficción, en la más pura irrealdad. El sistema perdió el equilibrio y se gestó pronto el

déficit; luego se ha ido acumulando sobre unas bases fijadas en 1974. El país se ha convertido de exportador de petróleo en exportador de capital. El crudo ha abierto horizontes, pero ha convertido a la economía en más vulnerable a los derroteros internacionales. El resultado económico se traduce en una continua y rápida expansión del gasto público y una tendencia crónica al déficit fiscal, la característica del último cuarto de siglo (SALGADO, G., 1989; 67). Además, el país entró en una política de industrialización más tardíamente que la mayoría de sus vecinos. Se ha avanzado con vacilaciones, con el lastre de un mercado reducido y controlado por oligarquías, y por la rigidez de la balanza de pagos; esas limitaciones condujeron al ingreso en la ALALC y Pacto Andino.

Fruto de esta secuencia la situación social es alarmante: desequilibrios en la distribución de ingresos, desocupación, éxodo rural, auge de suburbios y tugurios,... La era del petróleo ha agudizado los desequilibrios sociales, hecho que no encaja con la afluencia de divisas desde 1972. La balanza de pagos experimenta un cambio favorable fundamental a partir de ese año; pero entre 1972 y 1975 las importaciones ecuatorianas se triplicaron, y en el último año vuelve a surgir el déficit (cuando se prosigue exportando masivamente petróleo). Se consolida el mercado dual cambiario (en el oficial se reflejan tres cuartas partes de las transacciones, pero el resto queda al libre juego del dólar). Para paliar el impacto monetario del exterior se impusieron drásticas medidas: reducción en el crédito neto del Banco Central y eliminación de las restricciones cambiarias-arancelarias. A partir de 1981 el descenso del precio de los crudos obligó al establecimiento de otras para reducir importaciones, y a devaluaciones. Y una segunda política planteada por la situación de la crisis externa fue la renegociación de la deuda que no podía ser cancelada por la situación de los recursos externos (PÉREZ, S., 1989; 386). Se consiguieron logros, pero también vinieron desventajas: incremento del desempleo abierto y subocupación, de las tendencias migratorias rural-urbana, restricción de la capacidad de pagos al exterior, etc.

Así pues, durante la década de los setenta se desplomaron las bases de sustentación política del estilo de desarrollo, generando un período de grave inestabilidad, incertidumbre y confusión. Ahora se requieren acciones inmediatas correctoras de desequilibrios, y ajustes sociales más equitativos, porque la crisis ha agravado el estado de pobreza de los grupos con más bajos ingresos. Ello induce a una prioridad: la redistribución del ingreso y empleo. Pero las tasas del PIB no son garantía para lograr esos objetivos, como tampoco altos ingresos petroleros.

El déficit fiscal no es el causante de la crisis, pero puede convertirse en lastre de no acondicionar la política de generación de empleo a la fiscal. Sí lo es el sector externo que absorbe un tercio de los ingresos de exportación, con lo cual los niveles importadores no podrán ser mantenidos. Se debe tender, por tanto, a la búsqueda de un criterio selectivo de sustitución de importaciones, así como de mejores condiciones para el endeudamiento internacional. Como esas urgencias no han sido atacadas con diligencia el país presenta índices de pobreza y subempleo más elevados que el promedio de la región iberoamericana (PÉREZ, S., 1989; 386) (la subutilización de mano de obra, un tercio de la población, es doble que la media regional). Todo ello es indicativo de que los problemas estructurales de la economía siguen vigentes: escasa capacidad de generación de divisas (al menos en lo que se refiere a las no vulnerables por las oscilaciones de la demanda mundial), y claro dualismo entre sectores (moderno y tradicional). Tampoco se le da la importancia necesaria al sector



agrario; la política industrial es escasamente selectiva; y la generación de empleo queda en manos del Estado. El gran problema ha sido considerar la crisis como coyuntural y buscar la solución fácil: incrementar exportaciones, tanto petroleras como no petroleras (no exenta de riesgos). Incluso más: el país no dispone de la flexibilidad necesaria para aumentar su capacidad exportadora de petróleo sin verificar fuertes inversiones previas que no puede pagar; y el precio del café ha disminuido en los últimos tiempos, de modo que mayores ventas no significan ingresos proporcionales. La salida de disminución del gasto público no es viable porque ha sido un elemento dinamizador de la economía, hasta el extremo que existe una clara relación entre nivel de gasto público y ritmo de crecimiento económico (MARCHAN, C., 1989; 429); seguirla es contraproducente: puede volatilizar la inversión, que generará recesión haciendo más desigual la distribución de recursos.

Hay una falta de correspondencia entre crisis y medidas alternativas para abordarla. Las políticas impuestas por el FMI han acabado en fracaso porque sus resultados no son proporcionales a los costes sociales. Se debe orientar la inversión a producción de bienes y servicios básicos, trasladando la dinámica del desarrollo al mercado interno. Lograr la autosuficiencia alimentaria es un objetivo nacional; pero falta aplicar todavía una reforma agraria coherente y una red de flujos comerciales lógica. También, la política económica empleada para superar la crisis ha permitido una abrupta expansión del sector financiero en detrimento de actividades netamente productivas.

Así pues, dispone Ecuador de amplios recursos (CEBRIÁN ABELLÁN, F., 1995; 126-127), y un potencial económico en términos comparativos más favorable que la mayor parte de sus vecinos. Pero los sucesivos gobiernos no han formulado con claridad ni objetivos ni voluntad política de imponer medidas indispensables a largo plazo (LEFEBER, L. et al., 1985; 20). Han intervenido directa e indirectamente en el mercado; pero sus acciones, lejos de corregir sus efectos, acrecentaron el mal funcionamiento, agotando la mayor parte de los excedentes captados a través de impuestos y de la explotación de recursos nacionales; han seguido privilegiando lo urbano-industrial, cuando se requiere lo propio pero entre lo urbano y lo rural. Y el problema radica en buscar mecanismos para liberar la economía de sus actuales distorsiones, que combinan desempleo, inflación y dependencia externa, precisamente lo que se acomete de forma dubitativa e imprecisa.

Esta situación se demuestra de forma ineludible en el último quinquenio de los ochenta. Caída del precio de los crudos, sequías e inundaciones, los problemas derivados de la pugna de poderes entre Congreso y ejecutivo, y sucesivos conflictos en el interior de las fuerzas armadas, impidieron la obtención de logros. A ello se sumó el impacto de la crisis mundial y sus repercusiones en las ventas ecuatorianas (LUNA OSORIO, L., 1989; 45). Se creó un inmediato deterioro de la situación económica y social que llevó a la especulación como norma. Además, el esquema de economía de mercado no ha funcionado: aumentó la deuda externa y se produjeron fisuras en los sistemas institucionales, financieros y productivos, que no se podrán eliminar a corto plazo y que han resquebrajado más la estructura social. Se recogen los frutos de la siembra realizada en los últimos veinte años, cuando se han diseñado las distintas políticas paternalistas de fomento. La experiencia obtenida con la aplicación de políticas sectoriales no es nada satisfactoria porque prevalecen la estructura económica del inicio y sus problemas inherentes, en buena medida

propiciados desde el exterior. El Plan 1989-1992, que auspiciaba un desarrollo hacia dentro, tampoco dio los resultados esperados y el país se ha hundido en una fuerte dependencia de los centros industrializados, mientras se ha descuidado el sector agrícola. La prueba del fracaso es que casi 1,8 millones de trabajadores reciben salarios que no llegan al mínimo vital. Es resultado de una política laboral mal concebida, con remuneraciones sujetas al deterioro de la inflación.

## 2.2. La acumulación de desequilibrios en Perú

En el período 1960-1985 las ganancias fueron atesoradas, cuando lo correcto hubiera sido garantizar el crecimiento y frenar la tendencia inflacionista (desde mediados de los ochenta se hubo de establecer un programa de lucha contra la inflación basado en el congelamiento de precios y tarifas básicas). Las razones del declive económico son múltiples, pero es preciso aludir a dos: reducción paulatina del porcentaje de ganancias orientadas a la inversión productiva, y una ratio de impuestos que ha crecido acompañada con la inversión (no puede sostenerse que los impuestos hayan desincentivado a la inversión privada). Los resultados negativos de la crisis fueron: alta inflación (superior al 1.700%), y funcionarios y asalariados no agrícolas que cargaron con la mayor parte del coste de la crisis.

La nueva política redujo el ritmo inflacionario, pero persistieron las presiones en los sectores agropecuario, servicios, e industria (pequeñas empresas). Al tiempo, la dinámica de precios ha sido muy diferenciada, con un ritmo muy bajo de crecimiento en sectores vitales como el manufacturero; de igual modo, entre las tasas de variación de precios al por mayor y al consumidor. La balanza comercial fue muy negativa, mientras la demanda interna aumentaba aunque no acompañada de la producción nacional; de ahí que las expectativas inflacionarias aparecieran nuevamente. El efecto distributivo no se pudo alcanzar.

Son dos los sectores productivos: doméstico y exportador. Haciendo uso de las medidas económicas dictadas en febrero de 1986 se deduce un incremento en la demanda real y global en beneficio del primero; de igual modo, sube su participación en el ingreso nacional al mejorar los ingresos de los independientes. Pero se deterioran finanzas públicas y el ahorro en cuenta corriente del gobierno (por contracción de los ingresos e incremento de los gastos). Además, la dinámica nacional se mueve según algunos acontecimientos prefijados; así, es clara la propensión de consumo del sector agropecuario por parte de asalariados e independientes; también resalta la amplia capacidad ociosa y precios rígidos; por último, el fuerte crecimiento demográfico que representa un auge constante de la población en edad de trabajar, de tal modo que la adecuadamente empleada equivale sólo a un tercio de la económicamente activa.

Al margen, era evidente la necesidad de fortalecer el aparato del Estado desde la perspectiva estructural y, sobre todo, incrementando los ingresos a través de la subida de impuestos (ALARCO, G. y DEL HIERRO, P., 1989; 182). Se hacía preciso reducir actividades administrativas y orientar esos fondos a subsidios directos y servicios sociales. Asimismo, establecer precios de garantía para los productos agrarios, para evitar la caída de ingresos campesinos. Sin embargo, a finales de 1988 la crisis se había agudizado por acumulación de desequilibrios, especialmente en el sector externo (por la creciente pérdida de reservas internacionales durante los dos años precedentes), fiscales, negativo entorno

político que multiplicó los desequilibrios, y programas correctores demasiado drásticos.

Hoy, el país se encuentra atravesando una delicada situación tras el autogolpe presidencial último, que ha supuesto un cierto aislamiento forzado capaz de agudizar el difícil panorama que ya padecía a principios de la década, y la tensión con Ecuador. Las esperanzas de recuperación dependen de préstamos y renegociaciones de débitos, condicionados por el nuevo *estatus* político.

### 2.3. La difícil salida boliviana a la pobreza

El hecho de que las tasas de población rural y urbana se estén igualando explica una primera circunstancia: la relación que se da entre campo y ciudad, establecida por las fuertes migraciones de los últimos años, no implica una ruptura con el mundo rural sino que se mantiene en términos de intercambio de bienes y dinero (CALDERÓN GUTIÉRREZ, F., 1989; 192). Además, el peso del mundo rural en el urbano de La Paz es decisivo para entender la estructura del empleo. Junto a ello, bajos niveles de productividad del trabajo, estancamiento agrícola y de las actividades industriales, incremento del consumo de importación, concentración de la población en actividades de pequeña escala, y niveles de consumo cada vez más depresivos han volcado la economía agrícola a la salida narcoexportadora. El impacto de la crisis se nota en el desabastecimiento de alimentos a las grandes ciudades, aunque los niveles de consumo se han mantenido. Se explica por la capacidad de acción de la población, y la creación de una dinámica de intercambios con el campo, por la potencialidad de autoorganización social a través de fórmulas populares.

Una de las características de la situación económica nacional es la inconsistencia existente entre estructura productiva y demandas sociales, por deficiencias estructurales de la economía y la propia política estatal. En primer lugar, la economía está orientada al exterior, con el consiguiente deterioro en los intercambios. En segundo, por la comodidad de mantenimiento de un modelo económico acomodaticio. Bajo la incidencia de la crisis este panorama se ha traducido en una clara pérdida de la capacidad productora, unida a un incremento de importaciones como derivación de las nuevas necesidades nacionales. Ello ha conducido al auge de la deuda externa (en el último quinquenio de los ochenta subió un 130%), proceso que implica hiperinflación (en 1984 fue del 2.177%). Y el incremento del índice de precios *recayó* sobre la economía campesina, lo que significó reducción de la producción interna y más importaciones, que dispararon la balanza de pagos (han *mutado* hábitos de consumo y consolidado especulación y mercados negros).

La producción de coca es también consecuencia del agravamiento de la condición de subdesarrollo. La mejor prueba es el incremento productivo: en 1960 se cultivaban 4.450 has. y se obtenían 6.000 toneladas de coca; en 1986 las cifras habían pasado a 71.000 y 150.000 respectivamente. Esta producción contribuye con un tercio al PIB, y las exportaciones equivalen al sextuplo de las correspondientes a productos tradicionales. Incluso más: dos de cada tres bolivianos interviene en el tráfico de drogas (BONNET, N., 1987; 18), y los mineros han cambiado su actividad por ésta mucho más lucrativa (la ganancia de un día en el narcotráfico equivale a la de un mes en las minas de estaño), CEBRIÁN, A., 1995; 60).

Se han intentado alternativas; así, reducir la extensión a 12.000 has. Pero la ayuda

exterior se transformó en represión norteamericana tras un claro enfoque militarista que puede conducir a involuciones. Además, se requiere la constitución de mercados antes del establecimiento de cultivos alternativos, cosa que los estadounidenses no han previsto suficientemente. Tampoco se han creado las condiciones necesarias para que los campesinos accedan a créditos (BRACKELAIRE, V., 1992; 684). Y aún hay inconvenientes más graves: el contexto institucional es muy inestable, y el Estado es incapaz de asumir el desarrollo. La solución probablemente resida en la intervención de organizaciones no gubernamentales, que cuentan con más predicamento que el Estado (ARANGO JARAMILLO, M<sup>a</sup>. y CHILD VÉLEZ, J., 1986; 688).

Resulta que es la fuerte interacción campo-ciudad la que se ha vuelto contra sí. La problemática de la coca ha puesto en evidencia los problemas campesinos, y el conjunto de la población ha utilizado este argumento para obtener ventajas en las políticas sociales y de desarrollo rural. Ahí se encuentra una de las explicaciones fundamentales al fracaso de nuevas fórmulas.

### 3. EL CONO SUR

#### 3.1. La irradiación de la pobreza en Chile

Entre 1969 y 1987 la economía experimenta fuertes cambios en el mercado de trabajo (POLLACK, M. y UTHOFF, A., 1989; 127). A partir de 1973 el funcionamiento económico alteró los patrones de distribución del ingreso (SALAZAR, R., 1988). Desde 1975 (cuando el coeficiente de inversión fue inferior al de los años sesenta) la economía creció menos del 50% de lo conseguido en el resto del Cono Sur. Además, el 5% de la población percibía el 81% de la renta nacional, y el salario real era inferior al de 1981 en un 7%. En 1987 la renta media por habitante sólo superaba en su sector a Paraguay, pero se alejaba del resto. En contrapartida, su deuda externa era la tercera parte que la argentina (ascendía a casi 20.000 millones de \$), y la tasa de inflación (inferior al 13%) era la más baja, y el comercio favorable.

El responsable del denominado milagro económico será Hernán Büchi, que desde 1988 inicia el proceso de resultados sorprendentes. El crecimiento del PIB será cercano al 7%, pero se llegó a alcanzar el 8 en el sector industrial; la balanza comercial creció al subir los precios de los productos de exportación, y se reducía con ello la deuda externa ligeramente. Pero en la segunda mitad de los ochenta aún hacía falta iniciar la transición democrática; la derrota de Pinochet en referéndum (1988) alumbró el primer atisbo liberalizador, aunque se arrastra la carga de no haber conseguido hacer del ejército una institución apolítica. Será en 1991 cuando se liberalice la economía, y sólo un año después cuando se proceda a la reconstrucción económica.

La pobreza encuentra parte de explicación en la aplicación del modelo neoliberal impulsado por la dictadura, junto al aislamiento nacional. Entre 1970 y 1990 la economía experimentó fuertes fluctuaciones con ascensos del desempleo hasta el 20% (se multiplicó por tres las de décadas anteriores), de los salarios reales de un 38%, mientras el empleo público se llegó a reducir un 50%. El IPC de los pobres subió entre mediados de los setenta y ochenta un 81,5% más que el oficial (SALAZAR, R., 1989; 347).

Los más altos niveles de pobreza se emplazan en áreas rurales con un 50% inferior nivel de vida que en las urbanas. Otras fuentes, ahora externas, indican que el 45% de las familias raya la pobreza, entendida como la insatisfacción de necesidades básicas. La encuesta ALADES señala que en el primer quinquenio de los ochenta afectaba a la tercera parte de la población. Pero puede decirse que entre mediados de los setenta y finales de los ochenta experimenta un incremento. En Santiago la tasa de desocupación experimentó un retroceso aunque entre principios de los setenta y mediados de los ochenta la indigencia pasó del 8,5 al 23%, con la presencia de 2,3 millones de pobres. En 1976 la pobreza alcanzaría al 57% de la población, que se mantendrá cerca de los noventa (POLLACK, M. y UTHOFF, A., 1989; 132). Como reacción se recurrió a políticas redistributivas por su efecto a corto plazo y a programas de inversión buscando el incremento de empleos, con expansión de la racionalización del gasto público, aunque compaginadas con la actuación de las Organizaciones Económicas Populares (1.383 a mediados de los ochenta).

### 3.2. El lastre argentino de la deuda

En los setenta surgió una doble etapa, con subutilización de mano de obra y subempleo visible. Hacia finales de la década la tasa de ocupación era más estable, pero la deuda ascendía a 9.000 millones de \$, que con la aplicación del esquema económico de los militares se cuadruplicó en el siguiente sexenio, incremento explicado por la masiva fuga de capitales (entre 1976 y 1987 ascendió a 31.000 millones de \$). La crisis fiscal del Estado comienza a principios de los setenta rompiendo la trayectoria alcista precedente. El efecto más negativo se daría entre los asalariados y jubilados, los perceptores de remuneraciones fijas, al caer fuertemente el poder adquisitivo con la aceleración inflacionaria. Las tasas inflacionarias alcanzaron el 700% a mediados de los ochenta, culminación de un proceso iniciado en la década precedente cuando se alcanzó un incremento anual del nivel de precios cifrado en el 100%. cinco veces superior a la década anterior. El país se convierte en arquetipo de persistencia de alta inflación y bajo crecimiento. La evasión estaba en la cumbre del sistema. En 1987 la morosidad y evasión alcanzaba al 40% de las empresas, mientras la recaudación fiscal afectaba a un reducido número de contribuyentes. Los regímenes de promoción industrial se convirtieron en otro canal evasor, unido a la sobrefacturación de ventas al exterior auspiciada por grandes capitales (MINUJIN, A. y VINO CUR, P., 1989; 84).

El caso argentino es ilustrativo en incremento inflacionista. El fracaso deriva de una política presupuestaria insuficientemente restrictiva para devolver a la economía una tasa estable; con ello se produce una clara dolarización. En 1983, con la mutación política, la situación socioeconómica había agravado sus desequilibrios tradicionales de tipo estructural y agregado otros nuevos: estabilización, y una inversión que registraba caídas imparables (en la década 1974-84 un tercio con respecto a 1970 y casi la mitad con 1980) (BECCARIA, L. y ORSATTI, A., 1989; 23). A finales de 1990 las remuneraciones industriales eran inferiores a sus promedios históricos, pero superaban los niveles de los períodos de hiperinflación (MINSBURG, N., 1991; 1265).

### BIBLIOGRAFÍA

ALARCO, G. y DEL HIERRO, P. (1989): «Perú 1985-88: de la distribución a la reconcentración del ingreso». *Economía de América Latina*, nºs 18-19. pp. 153-191.

- ALEGRETTI, S. (1990): «Nuevas formas de concertación regional en América Latina». *Nuevas formas de concertación regional en América Latina*. Ed. Rialp, Buenos Aires, pp. 295-329.
- ARANGO JARAMILLO, M., CHILD VÉLEZ, J. (1986): *Coca-coca, historia, usos, manejo político y mafia de la cocaína*. Ed. Dos Mundos, Bolivia.
- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (1990). *Informe*.
- BECCARIA, L. y ORSATTI, A. (1985): «Argentina 1970-1984: la dinámica del empleo en el período de inestabilidad económica y social». *Economía de América Latina*, n° 13, pp. 21-47.
- BECCARIA, L. y ORSATTI, A. (1989): «Argentina 1975-1988: las nuevas condiciones distributivas desde la crisis». *Economía de América Latina*, n°s 18-19, pp. 57-83.
- BOISIER, S. (1992): «Los tiempos verbales del desarrollo en América Latina». *América Latina: la cuestión regional*. Col. Estudios, Cuenca.
- BONNET, N. (1987): «La coca, principal moteur de l'économie bolivienne». *L'Information Géographique*, vol. 51, n° 1, pp. 18-20.
- BORDORF, A. (1985): «Tradicición, vulnerabilidad externa y autonomía nacional: el papel de las relaciones europeo-latinoamericanas\*». *Revista Eural/Gel*, Buenos Aires.
- BRACKELAIRE, V. (1992): «Coca, développement et coopération internationale en Bolivia». *Revue Tiers-Monde*, T. XXXIII, n° 131, pp. 673-693.
- CALDERÓN GUTIÉRREZ, F. (1989): «Bolivia: la sociedad ante el deterioro económico. Estrategias de vida y urbanización». *Economía de América Latina*, n°s 18-19, pp. 191-201.
- CASANUEVA, H. (1994): «Los desafíos políticos». *El País*, 14 de junio, Madrid.
- CEBRIÁN, A. (1992): «Incremento de la pobreza en la dictadura: políticas sociales en Chile». *XV Encuentro de Jóvenes Geógrafos*. Asociación Española de Jóvenes Geógrafos de Murcia, pp. 25-30.
- CEBRIÁN, F. (1995): *Clasificación funcional de las ciudades ecuatorianas según el análisis de componentes principales*. Universidad de Castilla-La Mancha. Ciudad Real.
- CEBRIÁN, A. (1995): «La vital economía andina de los enervantes». *Papeles de Geografía*, n° 22; pp. 53-66.
- CHECA SÁNCHEZ, A. (1993): «Procesos de integración económica regional. La crisis económica y sus impactos espaciales». *Latinoamérica. Territorios y países en el umbral del siglo XXI*. AGE, Tarragona.
- DAVILA, A. (1989) «Bolivian peasant: restoring the dignity of coca». *Panascope*, n° 10, enero.
- DUBRESSON, A. y VANNEPH, A. (1991): «L'industrialisation du Tiers Monde». *L'information Géographique*, vol. 55, n° 5, pp. 177-191.
- FARREL, G. (1989): *La investigación económica en el Ecuador*. Ed. Ildis, Quito.
- FERRER, A. (1989): «Desarrollo integral y democracia en América Latina y el Caribe». *Política Exterior*, vol. III, n° 11, pp. 226-232.
- GARCÍA, R., CORDERO, F. e IZQUIERDO, A. (1987): *Economía y geografía del desarrollo en América Latina*. Fondo de Cultura Económica, México D.C.
- HAUSMANN, R. y MÁRQUEZ, G. (1985): «Venezuela: política de estabilización y mercado de trabajo en 1984». *Economía de América Latina*, n° 13, pp. 145-158.
- JAIMES, J., VIRLA, E. y GONZÁLEZ, P. (1988): «Prospección para un modelo autárquico como alternativa al desarrollo en la Venezuela de hoy». *Revista Geográfica Venezolana*, vol. XXIX, pp. 111-135.

- LAMBERT, D.C. y MARTIN, J.M. (1976): *América Latina: economías y sociedades*. Fondo de Cultura Económica, S.A., Madrid.
- LEDERMAN, E. (1989): «Crisis, bienestar social y desarrollo equitativo». *Economía de América Latina*, n<sup>os</sup> 18-19, pp. 325-335.
- LEFEBER, L. (1985): *Economía política del Ecuador. Campo, región, nación*. Corporación Editora Nacional, CERLAC y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Quito, Ecuador.
- LUNA OSORIO, Luis (1989): *Ecuador sociedad limitada...?* Ed. PROMOSER, Quito, Ecuador.
- MARCHÁN, C. (1989): *Ecuador. Sociedad limitada...?* Editorial CEDIGRAF, Quito, Ecuador.
- MARCHENA GÓMEZ, M. (1992-93): «Claves y conflictos actuales del desarrollo regional en América Latina». *Boletín AGE*, n<sup>os</sup> 15-16, pp. 189-202.
- MINSBURG, N. (1991): «La década perdida en Latinoamérica y el retroceso de la Argentina». *BICE*, n<sup>o</sup> 1.236, 22/28, abril, pp. 1.263-1.267.
- MINUJIN, A. y VINOCUR, P. (1989): «Argentina: ¿quiénes son los pobres?». *Economía de América Latina*, n<sup>os</sup> 18-19, pp. 83-89.
- OMAN, Ch.P. (1988): «Nuevas formas de inversión en los países en desarrollo». *Economía de América Latina*, n<sup>o</sup> 17, pp. 11-31.
- OMINAMI, C. (1988): «Le debat industriel latino-américain». *Revue Tiers Monde*, T. XXIX, vol. 115, pp. 837-884.
- PÉREZ, S. (1989): «Efecto de la crisis externa y las políticas económicas». En *La investigación económica en Ecuador*. Editorial ILDIS, Quito, Ecuador.
- POLLACK, M. y UTHOFF, A. (1989): «Pobreza y empleo en Chile: un análisis del período 1969-1987 en el Gran Santiago». *Economía de América Latina*, n<sup>os</sup> 18-19.
- RODRÍGUEZ, M.A. (1986): «Auge petrolero, estancamiento, política de ajuste y posibilidades de reactivación económica en Venezuela». *Economía de América Latina*, n<sup>o</sup> 14, pp. 93-120.
- SALAZAR, R. (1988): «Cómo se estudia la pobreza en Chile». *Revista de la CEPAL*, n<sup>o</sup> 38. Véase también *Economía de América Latina*, Ed. CIDE, México.
- SALGADO, G. (1989): «Lo que fuimos y lo que somos». En *La investigación económica en Ecuador*. Editorial ILDIS, Quito, Ecuador.
- SANTOS, M. (1992): «Modernité, milieu technico-scientifique et urbanisation au Brésil». *Annales de Géographie*, n<sup>o</sup> 564, pp. 130-147.
- SOTO MORA, C. (1990): «Impacto de las empresas transnacionales en la agricultura mexicana». *Investigaciones Geográficas*, n<sup>o</sup> 21, pp. 57-73.
- UPRIMY, R. (1992): «Croissance, rentes et violences: le cas sui generis de la Colombie». *Revue Tiers-Monde*, T. XXX, n<sup>o</sup> 17, pp. 121-137.
- VAN LINDERT, P. (1991): «Modelo de producción y regionalización del espacio. El ejemplo de Bolivia». *América Latina: regiones en transición*. Col. Estudios, Cuenca.
- VIOLA, E.J. (1989): «Población, recursos y medio ambiente en América Latina: algunas conclusiones provisorias». *Población y ambiente en América Latina* (Carlos REBORATTI, comp.). Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires.
- VUSKOVIC, P. (1984): «Debates actuales sobre el desarrollo industrial de América Latina». *Economía de América Latina*, n<sup>o</sup> 12, pp. 13-32.